

EDITORIAL

Sobre las elecciones sindicales



La CGT, como organización, se encuentra inmersa en pleno proceso de elecciones sindicales. Ahora, en junio, justo en la mitad de este año electoral 2007, posiblemente sea necesaria una mínima evaluación reflexiva sobre cómo transcurre este proceso, un primer balance, no sólo estrictamente estadístico, sino también cualitativo y de valoración.

Los datos nos indican sin ningún tipo de dudas que CGT está creciendo de forma significativa, pudiendo hablarse de un incremento en torno al 25 % en el número de delegados/as en relación a las elecciones del año 2003, quienes a su vez representaron ya un incremento del 25 % en relación a las anteriores. Como sindicato no tenemos techo electoral. Crecemos en cantidad y también en diversidad puesto que estamos entrando en sectores productivos nuevos, entramos en la pequeña y mediana empresa, estamos presentando listas en lugares hasta ahora inaccesibles al sindicalismo que CGT representa. CGT ya no es sólo un sindicato tradicionalmente implantado en las grandes empresas del sector público o privado, sino que la realidad es bastante más diversa y rica. Tenemos presencia en la práctica totalidad de sectores laborales, en todas las provincias.

La CGT está inserta en la realidad social, tiene presencia en los conflictos laborales más importantes que se plantean actualmente o puedan plantearse en el futuro. Son miles los delegados y delegadas sindicales que se computan bajo las siglas de CGT, tenemos capacidad de intervenir en todos los conflictos sociales. En definitiva, el balance no es, no puede serlo, sino optimista.

Ha sido una lucha muy dura la que hemos tenido que librar para poder imponer en el panorama sindical unas nuevas siglas. Han sido necesarias casi dos décadas para que la CGT empiece a ser reconocida de forma generalizada por toda la sociedad, y más concretamente, por la clase trabajadora. Hacerse hueco en el complicado panorama electoral actual no ha sido fácil, aunque ahora podemos saber y estar seguros de que estamos en el camino correcto. En serio, sin duda, entre delegados/as, candidaturas, votantes, afiliación, contactos, simpatizantes, compañeros de trabajo, movimientos sociales, vecinales, trabajadores extranjeros, ciudadanía en general... Son varios los millones de personas que a diario, de una manera o de otra, tienen contacto con las siglas CGT.

Cuando en 1989 tuvimos que renunciar por imperativo legal a nuestras siglas CNT y optar por las nuevas siglas CGT, éramos conscientes de que corríamos muchos riesgos, como el desconocimiento de nuestras propuestas entre la clase trabajadora, una posible pérdida de identidad, de historia y de memoria, necesidad de redefinir nuestro espacio y modelo sindical en el anarcosindicalismo, obligatoriedad de abrirse a un proceso de expansión y apertura para insertarnos en la realidad de esos años. Los riesgos se han convertido en realidad, pero se están superando con ideología, formación y ejemplos de coherencia en la lucha sindical.

Esos riesgos siguen presentes hoy en día y sólo pueden superarse como lo estamos haciendo: con convicciones profundas de que

la clase trabajadora necesita un modelo organizativo, no sólo revolucionario, sino libertario y antiautoritario, lo mismo que lo necesitaron nuestros compañeros y compañeras de clase desde 1910. Un modelo sindical que dignifique el sindicalismo, que sea el arma que utilicemos para superar la esclavitud y conseguir mejoras, un modelo sindical autónomo de la política partidista, basado en el pacto confederal libremente asumido, que se hace fuerte frente a las improvisaciones, a las debilidades egoístas personales o a las coyunturas... Respetando los acuerdos de los que libremente nos autodotamos.

Si la valoración que hacemos es optimista ante los resultados electorales en estos primeros seis meses del año 2007, debe ser a todas luces tremendamente optimista si

consideramos el punto de partida y el lugar de llegada desde el año 1989.

Desde que en 1984, en el Congreso de Unificación, adoptamos el criterio de presentarnos a las elecciones sindicales para vaciar de contenido los comités de empresa, como CGT, estamos demostrando día a día que esa "nueva vía" sindical que se podía abrir entre el sindicalismo de oficina, institucional, auto-denominado mayoritario y el modelo anarcosindicalista tradicional y ortodoxo, esa "nueva opción deseable", es posible. La opción sindical que representa y construye día a día CGT en el panorama anarcosindicalista es posible. Podemos crecer, queremos crecer, tenemos derecho a luchar por crecer, y todo ello bajo el ámbito ideológico del antiautoritarismo actualizado a la realidad del siglo XXI. En CGT nos reconocemos libertarios, así nos presentamos en las empresas. En CGT no estamos para hacer carrera política, ni estamos al servicio de ningún partido, ni estamos para manipular a los trabajadores/as, estamos para mejorar la sociedad, el mundo y, por tanto, para que mejoren las condiciones la clase trabajadora. Por eso, CGT es más que un sindicato, porque unimos la acción sindical y la social. En CGT, no le reconocemos la patente del anarcosindicalismo a nada ni a nadie porque por definición la sociedad libertaria del futuro tendrán que construirla los que vivan en ese futuro, con sus ideas, sus acuerdos, sus pactos, pero sin dogmas. Los trabajadores/as tenemos muy claro que nadie nos da nada a cambio de nada, que la emancipación la haremos nosotros mismos o no se hará nunca, que como nadie trabaja por mí, nadie puede decidir por mí.

Poco a poco, la CGT va creciendo y lo va haciendo de forma sólida, con pies de plomo, decantándose sin prisas y sin pausas, reconociendo su derecho a que la integren aquellas personas que sean leales con la organización. Tenemos claro que el mejor antídoto contra el revisionismo, el pragmatismo, el oportunismo y las influencias inconscientes del capitalismo es la formación.

En CGT cabemos todos y todas. Será el aprendizaje de nuestras estrategias, nuestra práctica, lo que vaya moldeando a ese conjunto de trabajadores/as que sufren la explotación social, económica, cultural, educativa y personal del capitalismo y que, en un momento determinado, deciden entrar en CGT, ser sus delegados y delegadas, ser su afiliación y militancia, ser su voz y sus rostros.

En sociedad civil no hay democracia. Pero puede haber democracia sin sociedad civil. Formal, convencional y teleológica (con teórica separación de poderes, imperio de ley, constitución, votaciones regulares, etc.), pero no real ni axiológica (con garantismo de libertades, respeto de las minorías, soberanía popular y una participación en la cosa pública entre libres iguales y racionales). O si no, basta con ver la reciente sentencia del Tribunal Supremo dejando sin "voz" política a una parte de la ciudadanía vasca que podría oscilar entre un 10 y un 15 % de su censo.

Por un puro juicio de intenciones tarifadas por ese adefesio jurídico que es la llamada Ley de Partidos, a un sector activo de aquel pueblo se le niega el "sagrado" derecho de sufragio. El Estado español les quiere como contribuyentes pero les niega sus derechos políticos y civiles más esenciales. Los convierte en "apátridas", en "sin papeles", lo que en el contexto del contencioso en que el asunto se ventila es como si a uno le retiraran la pista de aterrizaje cuando está a

punto de tocar tierra para volver a casa por Navidad.

"El normal funcionamiento de las Instituciones públicas y privadas, el mantenimiento de la paz interior y el libre y pacífico ejercicio de los derechos individuales, políticos y sociales, reconocidos en las Leyes, constituyen el fundamento del orden público". Así rezaba el artículo 1º de la tristemente famosa Ley de Orden Público promulgada en 1959 por la dictadura franquista para eliminar cualquier atisbo de resistencia o simple disidencia directa. Algo que visto en la perspectiva actual recuerda bastante al objetivo buscado, aunque no declarado, por el "statu quo" al ilegalizar a perso-

nas en las listas de Acción Nacionalista Vasca (ANV), un partido con plena legitimidad de origen y de ejercicio. Brutalizando a la propia Ley de Partidos en la que dice ampararse, esa disposición trata de guillotinar cualquier posibilidad de que una opinión mayoritariamente independentista y de izquierdas logre la hegemonía en el mapa municipal de Euskadi. La autodeterminación es un derecho en la Constitución de Gibraltar (colonia inglesa en suelo español) y en Montenegro un hecho (incluso con tutela de la Unión Europea), e incluso en Escocia es una opción política absolutamente respetable, pero en la España de la Pantoja y los preña-

dalicios reales está en busca y captura. Como la democracia durante el franquismo

Ni el artículo 6 de la Constitución, que reconoce el derecho a la pluralidad política, ni el 14, que afirma la igualdad de todos los españoles ante la ley, ni el 16, que protege la libertad ideológica, han valido frente a las poderosísimas razones de Estado que, como anunciaron a coro todos los grandes medios de comunicación en sus previsiones editoriales, blandía la autoridad vigente. Ha prevalecido, como en tierras de inquisidores y déspotas, la Ley que agrada al Príncipe. La misma impúdica retórica, en fin de cuentas, que impide la re-

visión de los juicios franquistas porque -¡manda carallo!- se hicieron cumpliendo la "legalidad vigente", según también la autoridad vigente.

Pero ahora estamos en el siglo XXI, con dos generaciones por medio y con un gobierno socialista en el puesto de mando (éste es el hecho diferencial y alucinante) y nada queda ya impune en la experiencia ética. Por si a alguien le interesa, el economista y sociólogo Albert O. Hirschman tiene estudiado en su libro "Salida, voz y lealtad" las consecuencias de un sistema que usa el monopolio de la fuerza para fomentar el separatismo de sus miembros al negarles su propia identidad. "(Cuando) la salida se considera una traición y la voz como una motín -dice-, a largo plazo, tales organismos tienen menos posibilidades de vida que los otros". Y la politóloga Chantall Mouffe, recuerda que incentivar la cultura del enfrentamiento antagonista (relación amigo-enemigo) en vez de promover el democrático duelo agonista (relación con el adversario) es una práctica totalitaria ya teorizada por el ideólogo filonazi Carl Schmitt.

El Tribunal Supremo fomenta el Separatismo

RAFAEL CID

Este año la reunión del G-8 (EEUU, Canadá, Japón, Alemania, Reino Unido, Francia, Italia y Rusia) se celebrará en Heiligendamm, en el Mar Báltico, a pocos kilómetros de Rostock, bajo la presidencia de la canciller alemana, Angela Merkel. Esta ciudad alemana va a ser, también, escenario de las protestas que arrecian ante cada cumbre del G-8, como en Génova en 2001, en Evian en 2003 o en Geneagles en 2005.

La agenda de esta cumbre viene marcada por lo que Angela Merkel denomina Crecimiento y responsabilidad, y está dividida en tres grandes bloques: garantizar el crecimiento económico mundial en un contexto en el que instituciones como el FMI, el Banco Mundial o la OMC arrastran una crisis más que larvada; definir las políticas de presión adecuadas para que África elimine todo tipo de barreras al pillaje de la inversión privada, y un brindis al sol sobre el cambio climático, del que Angela Merkel quiere salir como abanderada, al igual que hiciera Tony Blair con la deuda externa en Geneagles: promesa de reducirla a la mitad en un plazo de 5 años... Y que a fecha de hoy, según los datos del Banco Mundial, está lejos de cumplirse. Su monto actual, 2.800 millones de dólares, se encuentra en su nivel más alto.

Y va a estar condicionada tanto por el desorden internacional reinan-

te (emergencia de países como China, India o Brasil que compiten con los del G-8 en el mercado mundial; empantanamiento de las intervenciones militares en Irak y Afganistán, etc.; insolencia de países como Venezuela, Ecuador o Bolivia que cuestionan abiertamente el orden neoliberal reinante...) como por las protestas que levantan las políticas neoliberales a lo largo y ancho del planeta.

Como de costumbre, la reunión del G-8 viene precedida de reuniones ministeriales preparatorias (finanzas, exterior, medio ambiente...) para allanar el camino de los acuerdos y entre ellas queremos destacar la de los ministros de trabajo y empleo que, empeñados en dotar de una dimensión social a la globalización, concluyeron que la clave está en exigir la aplicación de reformas legales para flexibilizar, aún más, el mercado laboral.

Sin embargo, lo llamativo de este año es que, por primera vez, la reunión del G-8 cuenta con una hoja de ruta marcada por las patronales industriales de los 8 países reunidas el pasado 25 de abril en Berlín. En ese encuentro, la CBI de Gran Bretaña, Cofindustria de Italia, BDI de Alemania, JBF del Japón, RSPP de Rusia, CChC de Canadá, y USCIB de Estado Unidos suscribieron un documento (G-8 Business Declaration) en el que, tras recordar la importancia de la economía de los ocho grandes (60 % del PIB mundial, 60 % de la inversión directa y el 50 % del comercio mundial) y señalar la conveniencia del diálogo con los países emergentes, fijaron cuál debe ser el objetivo central del G-8 (garantizar la capacidad competitiva de la empresa privada a la que representan ante la creciente competencia internacional) y definieron los principales ejes de actuación:

- Desbloquear y concluir las estancadas negociaciones de la Ronda de Doha (que versaron sobre comercio agrícola, inversiones, privatización de los servicios, etcétera) en el seno de la Organización Mundial de Comercio.

- Reforzar las medidas legales sobre patentes y propiedad intelectual a fin de someter al interés del lucro privado el conocimiento humano y el control de los seres vivos del planeta.

- Impulsar la eliminación de cualquier traba legal, social, laboral, medioambiental o que garantice la soberanía de los países sobre sus economías, que impida al capital privado expropiar a placer cualquier zona del planeta.

- Y fijar como objetivo el botón africano, exigiendo el reconocimiento de la iniciativa privada como factor básico de su desarrollo económico y demandando la creación de

condiciones favorables -a cargo del erario público- que garanticen la rentabilidad de las inversiones.

Todo un programa para toda una patronal; todo un ejemplo de internacionalismo empresarial, que demanda aparcar las disensiones internas en el G-8 y le presta su apoyo frente a quienes critican sus decisiones por inapropiadas o ilegítimas. También, todo un ejemplo a seguir para oponerse al G-8 y sus políticas.

Esta cumbre representa más que ninguna otra el dominio neoliberal del mundo y la implantación de sus políticas hace bascular la relación de fuerzas a favor del capital, extendiendo cada vez más la masa de damnificados del planeta y poniendo en riesgo su propia existencia. Por ello, la movilización es más necesaria que nunca: para deslegitimarla y hacer impracticables sus decisiones.

El G-8 sabe, desde la cumbre de 2001 en Génova, que nunca más podrán llevar a cabo esas políticas sin levantar protestas y por eso las celebra en hoteles de lujo sellados a cal y canto como en esta ocasión en Heiligendamm. Y nosotras y nosotros sabemos que para romper esas vallas es necesario movilizarse para construir una relación de fuerzas que las haga impracticables.

Firman este texto ESK, Arantza Fernandez de Garaialde (STEE-EILAS), Mikel Galé (CGT), Laura González de Txabarri (ELA) y Celina Pereda (Harresiak Apurtuz).

G-8 ilegítimo

VARIOS AUTORES

Las patentes de curso eran documentos oficiales que podían acreditarse con el fin de demostrar que se estaba autorizado a perseguir por los anchos mares a piratas o barcos de enemigos. No hace falta que explique que los tiempos han cambiado y hay mucho pirata corporativo que porta patentes de curso para perseguir, en este caso, a los ciudadanos de países empobrecidos, y de los que no lo son, a través, por ejemplo, del precio de los medicamentos.

En India la multinacional farmacéutica Novartis exhibe su supuesta patente de curso para amedrentar, por la vía judicial, al Gobierno de ese país, que no le ha concedido patente para un medicamento contra ciertos tipos de cáncer. Normal, añado yo: las patentes, entre otras cosas, están para ofrecer una licencia a un invento, a algo nuevo, no a un producto comercializado desde hace varios años y cuya "nueva" versión, la que ha intentado repatentar Novartis, no aporta mejora alguna.

Durante las últimas semanas está publicándose sobre la decisión del Gobierno brasileño de obviar la patente de la farmacéutica Merck sobre Efavirenz, un medicamento contra el Sida. Cual piratas del Caribe, los responsables de ésta y otras compañías farmacéuticas intentan cobrar el mismo precio a países ricos y pobres; y cuando hay rebajas, éstas no son suficientes, como ha entendido el Gobierno de "Lula" da Silva.

La pelea del ejecutivo brasileño con las multinacionales farmacéuticas por este asunto viene de lejos. En 2003 el precio de Efavirenz era de 2,10 dólares mientras que empresas públicas brasileñas pueden hacerlo por 0,87 dólares. Tras sucesivas negociaciones Merck rebajó el precio

Patentes de curso: La acuciante crisis de la industria farmacéutica

MIGUEL JARA



de su brebaje contra el Sida pero, según las últimas informaciones, el margen de beneficio con respecto a lo que le cuesta el preparado genérico en India incluso ha crecido.

Éste es el motivo por el que el Estado brasileño ha decidido obviar la patente de Merck sobre Efavirenz y comprarlo en India. Se ha acogido para ello a ciertas normas de la nada democrática Organización Mundial de Comercio, ese Gobierno mundial en la sombra en el que participan casi todos los países del globo terráqueo, que permite suplantar a las pa-

tentes de medicamentos en caso de emergencia de salud pública; como ocurre para combatir la malaria, la tuberculosis o el Sida.

Para no extenderme más en este asunto, recordaros que mi libro "Traficantes de salud: Cómo nos venden medicamentos peligrosos y juegan con la enfermedad" dispone de un capítulo entero sobre este caso que he titulado "Guerra comercial en Brasil". Además, en el segundo bloque el mismo, "Crímenes corporativos", se analiza de manera extensa las prácticas de Merck y de

otras muchas farmacéuticas. También destaca que en el primer bloque del libro, "Medicamentos que matan", se dedica otro capítulo entero a lo que he dado en llamar "El tsunami Vioxx", una "superaspirina" de Merck ya retirada que, extrapolando los datos de la propia empresa, ha podido matar de infarto a unas 250.000 personas en todo el mundo.

Estos dos ejemplos recientes nos muestran uno de los caminos más claros por el que viene la gran crisis que puede afectar a la industria farmacéutica. Muchos fármacos con

patente están a punto de perderla o la perderán entre 2010 y 2012. A esto hay que unir que en los últimos años el número de nuevos productos farmacológicos patentados ha bajado. Por otra parte la demanda de remedios para enfermedades muy extendidas y de gran mortalidad en los países empobrecidos se contradice con el lucrativo sistema de patentes por el cual hasta ahora la industria farmacéutica ha conseguido licencias exclusivas para sus productos por unos 20 años durante los que explota sus remedios a precios elevadísimos respecto al coste de producción.

Las farmacéuticas conocen la posibilidad de esta crisis, pese a ser muy altos sus beneficios netos, hoy entre el 16 y 17 %, durante los últimos lustros han decaído de manera considerable. Por ello, la patronal sectorial española, ha propuesto al Gobierno desarrollar conjuntamente en los próximos cinco años la investigación médica de enfermedades raras, cuya financiación (trescientos millones de euros) sería costeada íntegramente por los laboratorios. A cambio exige que el Ejecutivo endurezca la protección sobre las patentes de fármacos más innovadores para protegerlos frente a la introducción de genéricos en el mercado. Trescientos millones es una cifra ridícula pues los propios laboratorios presumen de que poner un nuevo fármaco en el mercado les cuesta ochocientos millones de dólares. La operación es un claro chantaje para que el Gobierno frene el uso de genéricos cuando lo cierto es que el gasto sanitario público no para de crecer y la receta de genéricos sería un primer paso para cambiar esta dinámica.

Miguel Jara es periodista free lance, autor de "Traficantes de salud" (Icaria Editorial).